

Una ganadería policiaca

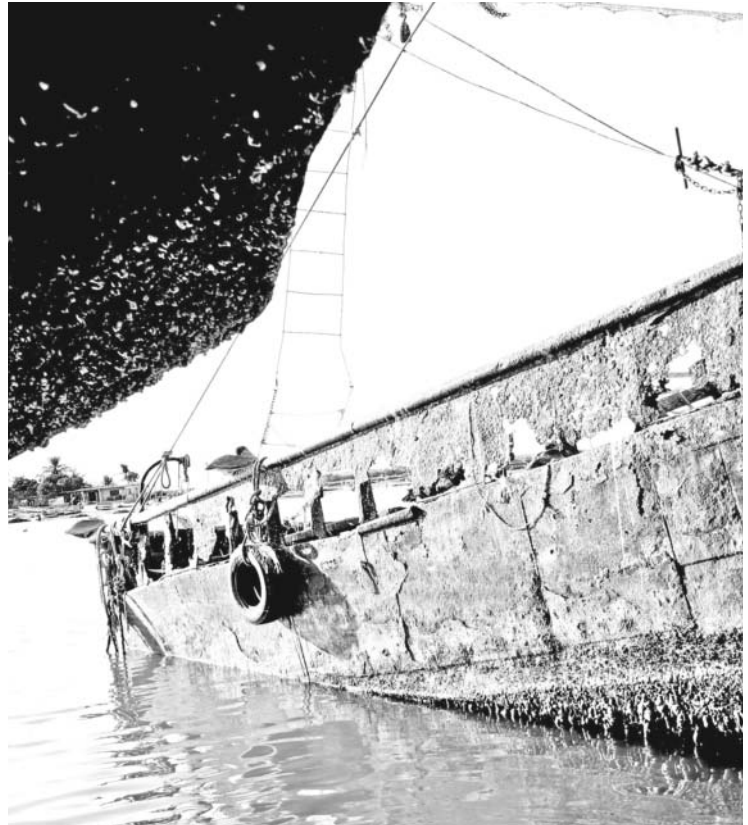
Kurt Michael Friese, devotay.gather.com Sabemos de la siniestra naturaleza de la modificación genética y el patentamiento de las semillas. Cada vez somos más los que vociferamos contra los peligros de un sistema alimentario en manos de unas cuantas corporaciones y terratenientes.

Durante los últimos cinco años el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA por sus siglas en inglés) y quienes tienen grandes intereses corporativos ha estado impulsando un programa que llaman National Animal Identification System [sistema nacional de identificación animal, o NAIS por sus siglas en inglés]. NAIS se nos promueve como un instrumento eficaz contra la diseminación de afecciones animales como la tuberculosis del ganado y la encefalopatía espongiforme bovina —la enfermedad de las vacas locas. Plantea métodos para etiquetar el ganado con microsensors de identificación, los mismos microchips que la gente utiliza con sus mascotas por si alguna vez llegan a perderse. La idea tras los sensores para ganado es que si una planta empacadora de carne en Greeley, Colorado, detecta que un costillar de ternera está contaminado con la enfermedad de vacas locas, rápidamente las autoridades puedan identificar la vaca, rastrearla por todo el sistema y descubrir otros animales con los que haya estado en contacto.

En la actualidad, y a nivel federal, NAIS es un programa voluntario supervisado por el USDA que muchos estados administran con ayuda de organizaciones como Future Farmers of America y Farm Bureau. Las granjas y todas las instalaciones de alimentación en confinamiento o aquellas que operen alimentación o confinamiento animal hacen su solicitud y reciben una designación formal numérica que luego se pone en microchips que se inyectan o que se colocan en las orejas de cada animal. Según el USDA, en 2007 Iowa pasó de 11 mil sitios registrados a más de 20 mil, un incremento de más del 80 por ciento. Esto pese a no contar con financiamiento gubernamental alguno para los participantes. Los granjeros tienen que invertir si deciden participar.

Dejando de lado que este sistema pareciera ser el perfecto método burocrático para cerrar las puertas de los corrales tras haber erradicado “las vacas locas”, todo parece bastante inocuo hasta que miramos con mayor detalle. Texas aprobó una legislación (entró en vigor el 31 de marzo) que exige un etiquetado NAIS para todas las vacas de lechería. Wisconsin, Virginia y Tennessee requieren ahora eso mismo para las cabras y las ovejas. En Michigan, quienes se rehúsan reciben visitas del sheriff que nos recuerdan las viejas películas del Oeste.

El sistema voluntario se vuelve perversamente obligatorio en muchos otros estados. En Colorado, según Judith McGeary, director ejecutivo de Farm and Ranch Freedom Alliance, dos familias que se rehusaron a registrar sus propiedades fueron echados de una feria estatal. En Idaho, el gobierno incluyó una forma de registro NAIS en los paquete-



tes requeridos para registrar las marcas propias (que tiene que hacerse cada cinco años). La forma no tenía muchas explicaciones y parecía parte de los documentos. En Tennessee y Carolina del Norte donde la sequía ha hecho urgente la asistencia, nadie puede obtenerla si no registra su propiedad.

Esto induce aullidos de rabia de un grupo opositores más y más visibles, como FarmAndRanchFreedom.org y NoNais.org, que juntan una mezcla extraña de radicales de izquierda y libertarios activistas de los derechos de propiedad. Ellos plantean que tales medidas draconianas son necesarias sólo para un sistema industrial de alimentos que provoca las mismas enfermedades que ahora quiere rastrear, con procedimientos demasiado invasivos, incluso orwellianos, para los pequeños enclaves familiares. Y mientras el gobierno insiste en que NAIS es voluntario, sus dependencias lo hacen obligatorio en los hechos. Claro, hay gente que vocifera que nadie debería registrar sus armas, pero las cabras son otro asunto. El Gran Hermano está entre nosotros. ❧

Noventa mil especies

Bolivia.com Por lo menos 90 mil especies de animales y plantas mueren cada año mientras que la erosión devasta kilómetros de suelos a causa de los efectos provocados por los países más industrializados que autodenominan “primer mundo”, afirmó el investigador colombiano Germán Vélez.

El investigador explicó que la erosión, la tecnología y la concentración de capitales en pocas manos son las causas principales para la destrucción del planeta.

“Los seres humanos olvidan que la biodiversidad y las culturas están estrechamente relacionadas”, reflexionó.

El experto, quien participó en el encuentro Construcción de la Sustentabilidad desde la Visión de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica dijo que en muchos países ya se vive la era de los transgénicos lo que repercute en la destrucción del hábitat del ser humano, de la flora y la fauna.

“Es hora de preguntarse: ¿quién va a controlar las nuevas tecnologías?, ¿por qué el afán de privatización de la vida?”, señaló al informar que los gobiernos de algunos países están modificando su legislación de semillas para lamentablemente ceñirse a las necesidades de la industria mercantil.

Al observar el nuevo texto de Constitución Política de Bolivia, que en su artículo 381 señala que el Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se encuentran en el ecosistema del territorio, Vélez afirmó que el Estado no puede sacar propiedad intelectual de los patrimonios colectivos.

Sin embargo, ponderó la decisión de prohibir la importación y comercialización de alimentos transgénicos lo cual podría convertir a Bolivia en el primer país libre de productos genéticamente modificados.

“Además se nos vienen encima todos los tratados de libre comercio que se imponen por todo el mundo. Ya casi todos los países de América Latina lo han firmado”, mencionó al aplaudir que Bolivia y Venezuela no quieran suscribir el TLC, cuando que lamentablemente Colombia se halla en la lista de espera. 🌿



Abajo la ley forestal colombiana

El espectador.com/Campaña en Defensa de la Biodiversidad y Soberanía. A mediados de enero, el Alto Tribunal de Colombia declaró inconstitucional la Ley Forestal por haberse aprobado sin consultar a comunidades afrodescendientes e indígenas, una de las razones por las cuales fue tan criticada tras su aprobación.

La Ley Forestal fue aprobada en diciembre de 2005, lo que generó un fuerte enfrentamiento entre el gobierno y sectores ambientalistas. En ese entonces, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, sin concretar acusaciones pero con suspicaces comentarios, se preguntó: “¿Será que hay algunos sectores interesados en que se mantenga el status quo y se siga atentando contra el bosque natural? ¿Será que hay personas que tienen negocios de reforestación y no quieren que nadie más pueda competir?”

Un mes antes, cuando la discusión de la Ley Forestal estaba al rojo vivo y varias organizaciones no gubernamentales, indígenas y afrocolombianas cuestionaban la falta de consenso ciudadano para definir los términos del articulado, la ministra de Medio Ambiente y Vivienda, Sandra Suárez, respondió a las críticas formuladas por varios sectores y manifestó: “El país tiene que abrir los ojos y entender que en materia de ambiente, la última palabra no la tienen dos ex-ministros”.

Después de una conciliación en Cámara y Senado, la Ley Forestal fue aprobada, momento desde el cual se anunciaron demandas ante la Corte Constitucional por parte de la mayoría de ambientalistas, insistiendo en que se tramitó a espaldas de las comunidades afrocolombianas e indígenas de Colombia, propietarias de la mayoría de bosques del país.

El ex representante a la Cámara, Pedro Arenas, se inconformó entonces con el proyecto por considerarlo lesivo para los intereses ambientales del país y con el trámite de ley porque no se realizaron consultas previas con las comunidades afectadas; se establecen temas tributarios que riñen con la unidad de materia, se abrieron votaciones sin existir quórum; no se permitió votar uno por uno de los 25 artículos más polémicos de la ley; el presidente de la Cámara desconoció su propuesta de enmienda total y se introdujeron artículos a última hora. Ahora, la Corte Constitucional les dio la razón a los ambientalistas. 🌿

<http://semillasdeidentidad.blogspot.com/2008/02/corte-constitucional-tumb-la-ley.html>

Uruguay: noveno lugar en producción transgénica mundial

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, Montevideo, 21 de febrero de 2008. El posicionamiento de Uruguay como noveno productor mundial de transgénicos, según la organización Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (o ISAAA, por sus siglas en inglés, como se le conoce mundialmente), con algo más de 500 mil hectáreas cultivadas, confirma la resistencia que enfrentan esos cultivos en el mundo entero. Sólo 23 países plantan transgénicos de un total de 238 que existen. Sin embargo, lamentamos que Uruguay esté en noveno lugar de la producción transgénica a nivel planetario, puesto que no se ha demostrado seriamente que tales cultivos no contaminen el ambiente ni afecten la salud humana. Algunas variedades están prohibidas en varios países europeos. Nueva Zelanda, que tantas veces nuestros gobiernos han citado como referencia en la producción agroganadera, no planta transgénicos, según consigna la propia ISAAA.

Esa organización, que responde a los intereses de la industria biotecnológica, destaca que el área global plantada con transgénicos creció más de 12 millones de hectáreas en 2007, lo que supuso un incremento de 12 por ciento con respecto a lo producido en 2006. En total, el área mundial de cultivos transgénicos alcanzó el año pasado los 114 millones de hectáreas. Los cultivos plantados son muy pocos, dentro de los que se destaca claramente la soja [soya], seguida por el maíz y el algodón. No obstante, diversas organizaciones ambientalistas a nivel mundial, entre ellas Amigos de la Tierra Internacional, siempre han cuestionado los informes de la ISAAA, a la que acusan de “inflar” los números.

Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, India, China, Paraguay, Sudáfrica, Uruguay y Filipinas son los



diez mayores productores de transgénicos. Detrás de Uruguay aparecen, entre otros, Australia, España, Francia y Alemania. Uruguay tiene unas 450 mil hectáreas producidas con soja transgénica y algo más de 50 mil con maíz GM. El trío de transgénicos que se pueden producir y comercializar en Uruguay son la soja RR, el maíz Mon 810 y el maíz Bt11.

La soja RR es una variedad genéticamente modificada con el propósito de hacerla resistente al herbicida glifosato. Es elaborada por la transnacional estadounidense Monsanto, la mayor productora de semillas transgénicas del mundo. Casi 100 por ciento de la soja producida en Uruguay es transgénica. El maíz Mon810, también producido por Monsanto, tiene una modificación genética que lo torna resistente a los ataques de insectos. Por su parte, el Bt11 es resistente también a algunos insectos. La empresa que lo produce es Syngenta, otra de las grandes transnacionales de los transgénicos.

Una comisión interministerial quedó encargada el año pasado de la elaboración de una normativa nacional de bioseguridad, al tiempo que se decretó una moratoria (prohibición) a la aprobación de nuevos eventos transgénicos. REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay (APODU) y la oficina uruguaya de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAAL) presentaron a esa comisión estudios y documentos que señalan los efectos negativos de la producción transgénica en varias partes del mundo. Los grupos esperan que el gobierno tome en cuenta debidamente la evidencia internacional de las consecuencias ambientales y sociales de esos cultivos.

El informe *El uso creciente de plaguicidas*, publicado el 13 de febrero por Amigos de la Tierra Internacional, expuso que la implantación de cultivos transgénicos provocó un aumento del uso de agrotóxicos en los países en que más se les produce. Esos cultivos no sirven para combatir el hambre ni la pobreza y no logran mayor productividad que las variedades convencionales. La utilización de transgénicos ha conducido al desplazamiento de pequeños agricultores y a una mayor concentración de la tierra en pocas manos. 🌱

inforedes@lists.subsur.
netprensa@redes.org.uy
www.radiomundoreal.fm

Graves incidentes en la costa chilena

Celco (Celulosa Arauco y Constitución), la mayor productora de celulosa a nivel nacional en Chile, tiene plantas de producción de celulosa en el sur de país que han estado involucradas en repetidos casos de contaminación, matando fauna silvestre o imposibilitando la producción agrícola en su entorno. Hace varios años Celco intenta instalar un ducto de varios kilómetros para descargar desechos industriales en el mar, en una zona con alta actividad de pesca artesanal lafkenche, la Caleta Mehuín. Los pescadores de la zona han resistido duro y largo, ya que la descarga de desechos con seguridad significa la contaminación y muerte de las especies marinas presentes en la zona.

La resistencia sigue fuerte y activa pese a que fue muy golpeada hace algunos meses, luego que la empresa ofreció dinero a un grupo de personas que eran parte del movimiento. Hoy quienes aceptaron el pago de la empresa son los mismos que actúan como matones a sueldo contra la gente que mantiene la resistencia y ocuparon la Caleta Mi-

sisipi y el pueblo de Mehuín, hostigan a la población, golpean a los integrantes del Comité de Defensa del Mar de Mehuín y a mujeres y hombres mapuche lafkenche del lugar. Hace unos días, varias organizaciones, entre ellas Ecoceanos, Olca y Conapach, elevaron su voz en protesta por la intención de Celco de instalar su ducto por el que descartaría residuos líquidos en la zona costera de Valdivia.

Grupos de policía militarizada, junto con la Armada de Guerra chilena, han ocupado los lugares protegidos por el Comité de Defensa de Mehuín. El despliegue represivo se acompaña de camiones lanzaagua y gases.

Mientras, “los violentistas que apoyan a Celco se pasean por el pueblo costero con total libertad y con una actitud de ‘matonaje y amenazas’, y la policía sólo se ocupa de mirar”.

En estas circunstancias la gente exige saber qué misión están cumpliendo las fuerzas del orden, cuando es claro que están ahí para proteger los intereses de la empresa en contra de las personas y por supuesto sin importar en lo más mínimo los daños ambientales que ocasionen los delitos que estas “fuerzas del orden” protegen. ❖



Comunicado de organizaciones de la Vía Campesina, Paraguay

Las organizaciones que integramos la Vía Campesina en Paraguay: Conamuri, MCNOC, OLT y MCP, nos dirigimos a todas las organizaciones integrantes de la Vía Campesina Internacional, así como las demás organizaciones sociales nacionales e internacionales y la opinión pública en general, para manifestar nuestro absoluto repudio por la manipulación de haber incluido el nombre de nuestras organizaciones en el marco de la Campaña de la Soja Sustentable (antes llamada Responsable), integrada por la Central de Organizaciones Campesinas de Productores Ecológicos del Paraguay COPEP, ONG como WWF, Solidaridad, Guyra Paraguay, e IDEA, quienes comparten con empresas multinacionales como Unilever, Grupo Andre Maggi, Bancos como el ABN-MARO y gremios como CAPECO, CAP y AAPRESID.

Aclaremos que no somos integrantes de la Campaña de la Soja Responsable, y que algunas de nuestras organizaciones de base, han participado en diversos debates y foros para dar nuestra postura en contra de la Expansión de la Soja Transgénica en Paraguay y a raíz de esto han involu-

crado el nombre de nuestra organización sin ninguna consulta y criterios de aprobación de parte nuestro.

Consideramos que este tipo de prácticas son una violación a los derechos y autonomías de nuestras organizaciones y exigimos la inmediata revocación del nombre de nuestras organizaciones a estas iniciativas.

También recordamos que en el año 2006, organizamos conjuntamente con varias organizaciones la Marcha contra la Segunda Conferencia Global de “Soja Responsable” realizada en Paraguay. Hemos realizado diversas acciones para visualizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos que sufren los campesinos y campesinas a raíz de la expansión de la soja transgénica y el uso de agrotóxicos que causa muertes y expulsión forzosa de los habitantes del campo y destruye el medioambiente.

Ante esta situación aclaramos que nuestra lucha en contra del modelo agroexportador seguirá afianzándose y estaremos activas para evitar que el nombre de nuestras organizaciones sigan manipulándose. ❖

Asunción, 28 de febrero de 2008
Globalicemos lucha, globalicemos la esperanza

Paraguay

La paramilitarización del campo con la expansión de la soya

Recientemente se publicó un iluminador documento de Javiera Rulli (BASE Investigaciones Sociales, Buenos Aires, Argentina), sobre la expansión de la soya [o soja] y la necesidad que tienen las agroindustrias de imponer mediante la violencia sus monocultivos en toda Latinoamérica, especialmente en Paraguay. Presentamos algunos fragmentos del texto

Paraguay podría ser calificado como el país donde el agronegocio toma la cara más cruel, desplazando y violentando a la población rural con total impunidad. La militarización y para-militarización del campo están vinculadas a la ampliación y salvaguarda de los cultivos de soya, que no crecen solamente sobre las tierras de los latifundistas sino también, y en gran proporción, en la superficie de las comunidades campesinas e indígenas.

El Centro de Documentación y Estudios (CDE) explica los antecedentes del conflicto así: “En las colonias campesinas se da un proceso de minifundización de las parcelas, especialmente en aquellas más antiguas a causa del crecimiento poblacional; a este hecho se le suma ahora el desplazamiento compulsivo de los pobladores de las comunidades campesinas, debido al avance de la agricultura comercial o mecanizada”.

Diversas misiones de observadores internacionales han podido atestiguar la violencia que producen los monocultivos de soya sobre la población rural paraguaya. En este sentido, las conclusiones de la misión internacional de FoodFirst International and Action Network (FIAN) y Vía Campesina en 2006 fueron rotundas: “la expansión desenfrenada del cultivo de soya causa hostigamientos, ataques y asesinatos cometidos por cuerpos policiales, parapoliciales y por grupos

privados armados, en contra de líderes campesinos/as”.

Así también se ha denunciado frente a diversos organismos estatales y de derechos humanos la existencia de escuadrones de la muerte dentro de la Policía Nacional, responsables de la muerte de por lo menos 18 dirigentes campesinos ejecutados por estos grupos. En otros casos, los asesinatos de líderes campesinos han sido cometidos por las comisiones de seguridad ciudadana. A estas organizaciones, que actúan como instrumento de represión y control social en los momentos en que los conflictos agrarios se intensifican, se les acusa de realizar prácticas totalmente ilegales: desalojos, allanamientos, torturas, asesinatos, ataques a la libertad de expresión y religión, contra quienes no aceptan su orden.

La segunda expansión de la soya en Paraguay se dio en 2000 con la introducción de la soya genéticamente modificada, y hay en directo un aumento vertiginoso de campesinos sin tierra debido a que esta ola de expansión ocupa sobre todo tierras campesinas, en un momento en que se agotaron las tierras públicas. Las comunidades que viven rodeadas de monocultivos de soya son violentadas. La práctica del “guardia armado”, en los latifundios que rodean a la comunidad, o los guardias del productor sojero que alquila tierras en la comunidad, conllevan la para-militarización del campo, la corrupción de las fuerzas del orden y el acoso a los sectores organizados de las comunidades.

Finalmente se debe atribuir otro tipo de violencia al modelo sojero: muerte por envenenamiento, intoxicación masiva, expulsión “legal” de sus tierras, enajenación del territorio nacional, pérdida de la soberanía alimentaria y territorial.

En Paraguay la impunidad histórica de que gozan los latifundistas determina un clima donde los agronegocios avanzan rápidamente. Esta es una característica inalienable de la atracción de inversionistas extranjeros al país. La certeza de actuar impunes y de forma mafiosa para establecer su nego-



cio, en un territorio donde lo único que importa es tener capital, no hay leyes ni ningún principio moral que seguir.

Desde 1989, año en que cayó la dictadura, han sido asesinados más de cien dirigentes campesinos, de los cuales sólo un caso fue investigado y su autor condenado; los demás permanecen en la impunidad. La criminalización de la protesta es muy grave; en 2004 las organizaciones campesinas llegaron a registrar 1 156 detenciones siendo la población rural aproximadamente de 2.3 millones de personas. Un registro alarmante si se considera que en el mismo año en Brasil se dieron 421 detenciones en el campo, donde la población rural alcanza los 32 millones. ✿

El texto completo puede consultarse en diferentes páginas entre las que se encuentran: <http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=557>; www.biodiversidadla.org/content/view/full/39113 <http://cml.vientos.info/node/13304>; <http://imediata.org/index.php?p=173>; <http://carmeloruiz.blogspot.com/>

Por tercera vez rechazamos la mentira de la soja [soya] responsable

Los agronegocios son responsables de la devastación de nuestros suelos, la deforestación, la contaminación de ríos y acuíferos, la desaparición de la biodiversidad, la expropiación del patrimonio natural y cultural y la eliminación de la agricultura familiar que antes alimentaba a nuestros pueblos. La expansión de los monocultivos de soja atenta principalmente contra la soberanía territorial, alimentaria y cultural de los Estados nacionales y los derechos de los Pueblos Originarios y Campesinos. El modelo de la soja excluye, empobrece y enferma a la población. Este modelo de ocupación territorial viola los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los monocultivos industriales se expanden vaciando el territorio con su violencia estructural inherente, causan la migración rural y marginalización de la población en las ciudades y finalmente, generan la criminalización de la pobreza y los movimientos sociales.

A pesar de esto, en la actualidad los agronegocios de la soja se están fortaleciendo con los crecientes mercados de la industria de alimentos procesados, la cría industrial de carne y la producción de agrocombustibles que, dicen, nos “salvará del cambio climático”. En la práctica se consolida la hidrovía parte del IIRSA, aparecen nuevos sistemas ferroviarios, se implementan más transgénicos y aumentan las importaciones de pesticidas y maquinaria para expropiar más rápidamente nuestros suelos.

Cada vez avanza más el agronegocio y vemos consternados como muchos gobiernos europeos, frente al aumento de críticas y denuncias de la situación de nuestros países, están ciegamente confinados en las Mesas Redondas de Negocios Sustentables de la WWF. Se las reconoce como casos exitosos de referencia para los nuevos criterios legales de sustentabilidad, específicamente para la producción de agrocombustibles. De esta forma los gobiernos europeos están ciegamente cayendo en la trampa del maquillaje verde de las transnacionales.

Los movimientos sociales del norte y del sur rechazamos plenamente todos los intentos de las corporaciones y ONG de instalar en la opinión pública criterios de sustentabilidad o de responsabilidad, en relación a los monocultivos de soja transgénica. Objetamos los programas de Respon-

sabilidad Social Empresarial (RSE) que pretenden, a través de mesas de diálogo y medidas voluntarias, invisibilizar la responsabilidad de los crímenes cometidos por las corporaciones y donde éstas reemplazan al Estado en sus funciones públicas con políticas privadas asistencialistas.

Nos oponemos al proyecto neocolonial de dominación por parte de los agronegocios, que sistemáticamente tergiversan de manera perversa muchos de nuestros propios discursos, y denunciamos ese maquillaje verde con que las corporaciones internacionales disputan los mercados calificados de certificaciones.

Recordamos que en marzo del año 2005, organizaciones campesinas y ecologistas de nuestros países, incluyendo la Vía Campesina de Argentina, Paraguay y Brasil, marchamos juntas hasta Foz de Iguazú para denunciar la Primera Reunión de Soja Sustentable. Simultáneamente activistas holandeses se solidarizaron protestando frente a la sede de la industria de piensos PROVIMI en el puerto de Róterdam. En 2006, los movimientos sociales paraguayos, organizaciones urbanas y campesinas se manifestaron repudiando la Segunda Mesa de Soja Responsable en Asunción. Recientemente, la Vía Campesina del Paraguay rechazó públicamente el intento de involucrarlos en campañas maquilladas por la Soja Responsable. Por eso ahora volvemos a rechazar este proyecto corporativo liderado por la WWF, Fondo Mundial de la Naturaleza, los grupos sojeros de agronegocios Aapresid de Argentina, Abiove, Maggi y Aprosoja de Brasil, DAP de Paraguay, Bunge y Cargill de Estados Unidos, la banca ABN-AMRO Bank de Holanda y las ONG Fundapaz de Argentina, Guyra (Birdlife) de Paraguay, Solidaridad de Holanda, entre otras. Ratificamos una vez más nuestro compromiso de marchar juntos en procura de recuperar la soberanía alimentaria de nuestros pueblos y de enfrentar las maniobras de desinformación y seducción del agronegocio. ¡Exigimos la liberación de nuestros territorios de estos agronegocios criminales y justicia para todas las víctimas del modelo sojero! 🌱

¡Donde hay monocultivo no puede existir sustentabilidad!
¡Donde hay agro negocios no pueden existir campesinos!

Firman 69 organizaciones internacionales adheridas hasta el 21 de marzo: Para adherirse contactar/ to sign: stopRTRS@gmail.com



¿Un ya basta africano?

El continente africano la tiene difícil. El colonialismo encubierto vuelve a impulsar una Revolución Verde, con todas las implicaciones nocivas ya conocidas de la primera versión. La Unión Europea impulsa acuerdos bilaterales de asociación con África que son todo menos recíprocos. Las grandes corporaciones promueven activamente la explotación total de recursos a costa de un genocidio horripilante, la conflagración más letal desde la Segunda Guerra Mundial en la República Democrática del Congo (más de 5 millones de muertos, invisibles para Occidente), que beneficia en materia prima para la tecnología de punta a varias conocidas corporaciones electrónicas internacionales. Para colmo, Washington fortalece a los barones de esa guerra y hoy busca instalar, por razones de negocio y geopolítica, un comando estadounidense para controlar el continente entero, el llamado Africom.

No obstante, los acuerdos bilaterales (conocidos como EPA) no marchan, “ya el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, se negó a firmarlos furioso, el de Sudáfrica, Thabo Mbeki, inmediatamente apoyó su postura y el de Namibia, Sam Nujoma, también decidió no firmar”, escribió hace poco el analista Ignacio Ramonet.

En cuanto al comando continental en África, escribe Stefano Liberti para *Il Manifesto*: “el anuncio de la creación de Africom suscitó desde el principio una resistencia de costa a costa. El movimiento de oposición partió de Sudáfrica a través de su portavoz de defensa Mosioua Lekota, que afirmó: ‘los países africanos se oponen a la creación de un mando unificado en el continente’. Después, toda la Southern African Development Community (SADC), organización regional que agrupa a 14 países de la sub-región, adoptó su posición. A esto se sumaron las voces de varios países de peso: Libia, Marruecos, Argelia, Senegal y Nigeria. El índice de aceptación de



Estados Unidos en el continente está hoy en sus mínimos históricos”.

Por si fuera poco, pese al enorme impulso que la Fundación Gates y la Fundación Rockefeller le han dado a la Nueva Revolución Verde en África mediante la llamada AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa), el sentir del continente se expresó con firmeza desde el Tercer Foro Anual de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección del Patrimonio Genético Africano (conocido como COPAGEN), con miembros de Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo, reunidos entre el 23 al 28 de julio de 2007 en Conakry: “Nos encontramos particularmente preocupados por las numerosas iniciativas emprendidas hoy en día por instituciones financieras ajenas al continente africano, con el objetivo de imponerle a África lo que ellas han convenido en llamar la nueva revolución verde... Una de las razones más importantes del fracaso [de la primera revolución verde] fue la exclusión de los principales concernidos, los campesinos africanos. A pesar del discurso apelando al involucramiento de los campesinos, los actores de la revolución verde en África, especialmente la Fundación Rockefeller, casi no tomaron en cuenta la situación de los productores africanos. De esta manera, cientos de millones de dólares fueron volcados en institutos de investigación, generalmente piloteados desde el exterior del conti-

nente, como si los problemas de la agricultura africana no fuesen sino técnicos”.

Respecto de AGRA, añaden: “En efecto, ya hemos constatado la cuasi ausencia de los actores africanos al nivel de las instancias de dirección de la alianza, actores que están actualmente implicados en la resolución práctica de los problemas de la agricultura africana: ni las organizaciones de pequeños productores campesinos, ni las organizaciones no gubernamentales que actúan en el ámbito de la agricultura en el continente tienen representación dentro de las instancias de decisión del AGRA. ¿Cómo puede la alianza ‘trabajar en estrecha relación con los pequeños productores campesinos más pobres de África’ —tal como lo indica M. Gordon Conway, el gran teórico de la revolución verde de la Fundación Rockefeller— sin vincularlos ni a la elección de las orientaciones ni a la toma de decisiones?... Consideramos que toda aproximación de solución para el desarrollo de la agricultura africana debe ser holística, otorgando igual atención a todos los aspectos del problema (políticos, económicos, socio-culturales y tecnológicos), pero principalmente vinculando a toda decisión a los primeros actores implicados, los campesinos”.

Para terminar hacen un llamado al diálogo y una advertencia: “Sin un diálogo tal, AGRA corre el riesgo de repetir los errores del pasado y será considerada responsable ante la historia”. 🌿